

C.A. de Santiago

Santiago, treinta de agosto de dos mil veinticuatro.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que, comparece don Matías Madariaga Boza, abogado, en representación de la Corporación Municipal de Servicios y Desarrollo de Maipú, e interpone recurso de reclamación en contra de la Resolución Exenta PA N° 000824, de fecha 23 de agosto de 2023, dictada por la Superintendencia de Educación, que resolvió acoger parcialmente el recurso de reclamación que dedujo en contra de la Resolución Exenta N° 2022/PA/13/0763, de fecha 01 de abril de 2022, rebajando la sanción aplicada a una multa a beneficio fiscal de 51 Unidades Tributarias Mensuales (UTM).

El reclamante considera que dicha sanción no se ajusta a la normativa educacional y al derecho en general, generando un grave perjuicio tanto al establecimiento educacional como al presupuesto de educación comunal.

Explica que los hechos que sirven de fundamento al reclamo se remontan a una denuncia que dio origen a un acta de fiscalización N° 211302515, de fecha 10 de septiembre de 2021. Posteriormente, el Director Regional de la Superintendencia de Educación de la Región Metropolitana ordenó instruir un proceso administrativo, formulándose tres cargos contra el establecimiento educacional. Mediante Resolución Exenta N° 2022/PA/13/0763, de fecha 01 de abril de 2022, se aprobó el proceso administrativo sancionatorio, aplicando una sanción de multa de 54 Unidades Tributarias Mensuales (UTM).

Al respecto, refiere que los cargos formulados fueron los siguientes: (1) El establecimiento no garantiza un justo proceso que regule las relaciones de los miembros de la comunidad escolar, al contar con un reglamento interno no ajustado a la normativa vigente; (2) El establecimiento vulnera derechos y/o no cumple deberes para con los miembros de la comunidad educativa, específicamente en relación a una estudiante que presentó inasistencias prolongadas; y (3) El establecimiento no cuenta con personal docente idóneo necesario, al tener un profesor sin la habilitación requerida para impartir clases en educación básica.

La reclamante interpuso un recurso de reclamación administrativa ante la Superintendencia de Educación, el cual fue parcialmente acogido mediante la Resolución Exenta N° 000824 de fecha 23 de agosto de 2023, rebajando la sanción a 51 UTM.

En cuanto a los fundamentos de derecho, arguye una vulneración al principio de proporcionalidad establecido en el artículo 73° de la Ley 20.529.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: CVCTXPPXWDR

Argumenta que la resolución recurrida no fundamenta el monto de la multa ni lo relaciona con los requisitos previstos en la norma, como el beneficio económico obtenido, la intencionalidad, la matrícula total del establecimiento y la subvención mensual por alumno.

Asimismo, sostiene que existe una aplicación errónea de la sanción, argumentando que los hechos constituyen una infracción leve según el artículo 78 de la Ley N° 20.529, al no tener señalada una sanción especial. Invoca el principio in dubio pro reo y cita jurisprudencia de la Corte Suprema y la Corte de Apelaciones para respaldar su posición.

Se acompañan los siguientes documentos: 1) Copia autorizada de Escritura Pública de nombramiento de don Ignacio Esteban Cáceres Pinto como Secretario General de la Corporación; 2) Escritura Pública que acredita la representación del abogado Matías Madariaga Boza; 3) Resolución Exenta N° 000824 de fecha 23 de agosto de 2023; 4) Correo electrónico de notificación de fecha 28 de agosto de 2023.

En virtud de lo expuesto, solicita que se acoja el recurso de reclamación y se deje sin efecto la Resolución Exenta PA N° 000824, de fecha 23 de agosto de 2023, que aplica la sanción de 51 Unidades Tributarias Mensuales. En subsidio, solicita que se aplique una amonestación por escrito o se rebaje proporcionalmente la multa, con expresa condena en costas.

Segundo: Que, la Superintendencia de Educación evacuó el informe requerido, solicitando el rechazo de la reclamación, en base a los siguientes antecedentes.

Explica que la Dirección Regional Metropolitana de la Superintendencia instruyó un proceso sancionatorio contra el establecimiento educacional Liceo Bicentenario de Niñas de Maipú, RBD N°31-074-3, cuya entidad sostenedora es la Corporación Municipal de Servicios y Desarrollo de Maipú. El proceso se originó a raíz de una denuncia ingresada el 10 de agosto de 2021 relativa a "Docente sin idoneidad profesional o moral". Tras la tramitación de la denuncia, se realizó una fiscalización el 10 de septiembre de 2021, que condujo a la formulación de tres cargos: 1) El establecimiento no garantizaba un justo proceso que regulara las relaciones de los miembros de la comunidad escolar, al contar con un reglamento interno no ajustado a la normativa vigente. 2) El establecimiento vulneraba derechos y/o no cumplía deberes para con los miembros de la comunidad educativa. 3) El establecimiento no contaba con personal docente idóneo necesario.



Tras el proceso administrativo, mediante Resolución Exenta N°2022/PA/13/0763 del 1 de abril de 2022, se acreditaron los cargos N°1 y N°2, desestimándose el cargo N°3, y se aplicó una sanción de multa de 54 Unidades Tributarias Mensuales (UTM). El sostenedor interpuso una reclamación administrativa, que fue acogida parcialmente mediante Resolución Exenta N°000824 del 23 de agosto de 2023, rebajando la sanción a 51 UTM.

Así las cosas, la Superintendencia solicita el rechazo de la reclamación judicial interpuesta en su contra, por las razones que, a continuación, se detallan.

Sobre la alegada aplicación errónea de la sanción, argumenta que la calificación de la infracción como "menos grave" es correcta. Explica que las infracciones menos graves están vinculadas íntimamente con deberes y derechos establecidos en la normativa educacional, mientras que las infracciones leves son aquellas que no tienen señalada una sanción especial. En este caso, la obligación de tener un reglamento interno ajustado a la normativa y aplicarlo correctamente se relaciona con derechos sustantivos del sistema escolar, por lo que su incumplimiento constituye una infracción menos grave.

En relación con la vulneración al principio de proporcionalidad, sostiene que la sanción de 51 UTM está dentro del rango legal para infracciones menos graves (51 a 500 UTM), aplicándose el monto mínimo. Argumenta que se consideraron los elementos del artículo 73 de la Ley N°20.529 para graduar la sanción, incluyendo la matrícula total y la subvención mensual del establecimiento. Además, se ponderó como atenuante el hecho de que el sostenedor no había sido sancionado previamente por infringir el mismo bien jurídico.

Respecto de la culpabilidad, argumenta que en materia administrativa sancionatoria basta la comisión de la infracción para establecer la culpa, sin necesidad de analizar si la conducta fue dolosa o culposa. La falta de intencionalidad alegada por el recurrente no exime de responsabilidad al sostenedor.

En cuanto al perjuicio económico, arguye que el perjuicio económico es inherente a toda sanción pecuniaria y que las multas son uno de los mecanismos previstos por el legislador para garantizar el cumplimiento de la normativa educacional.



En virtud de estos argumentos, la Superintendencia de Educación solicita que se tenga por evacuado el informe requerido y que se rechace la reclamación judicial en todas sus partes, con expresa condenación en costas.

Tercero: Que, el recurso de reclamación contemplado en el artículo 85 de la ley N° 20.529, constituye un especial medio de impugnación de las resoluciones dictadas por el Superintendente de Educación, cuando éstas no se encuentren ajustadas a la normativa educacional, que permite a esta Corte dejar sin efecto las mismas, como fluye del tenor de dicho precepto legal. Así, corresponde determinar si la resolución recurrida en este acto fue dictada por la autoridad señalada en contravención a la normativa educacional y, en caso afirmativo, si es susceptible de ser dejada sin efecto, conforme aparece del petitorio del recurso.

Cuarto: Que, en cuanto al fondo de la acción intentada corresponde, en lo que respecta a reprochada al reclamante, resultó confirmado durante el proceso sancionatorio seguido en su contra, que el establecimiento Liceo Bicentenario de Niñas de Maipú, RBD N°31-074-3, efectivamente infringió la normativa educacional, particularmente, distintas disposiciones establecidas en la Circular N° 482 de 2018 de la Superintendencia de Educación, que imparte instrucciones sobre reglamentos internos para establecimientos de educación que exige que dichos reglamentos deben contener un protocolo de actuación que contemple procedimientos específicos para abordar situaciones de vulneración de derechos a estudiantes, en los términos del Anexo 1, habiendo incurrido en infracciones de carácter menos grave de conformidad al artículo 77 lera c) de la Ley N° 20.529 que dispone: “Son infracciones menos graves aquellas en que infringen los deberes y derechos establecidos en la normativa educacional que no sean calificados como infracción grave.

Quinto: Que, en cuanto al Cargo N° 1, referido a que la reclamante no contaba con un protocolo de vulneración de derechos en su Reglamento Interno, se constató dicha falta toda vez que requería por el ente fiscalizador la remisión de dicho protocolo no fue remitido ni exhibido, no obstante pedirle su remisión mediante solicitud de nuevos antecedentes, con lo cual se concluyó que no contaba en el mencionado protocolo.

Sexto: Que, en cuanto al Cargo N° 2, consta del acta de fiscalización que entre el 29 de abril y 29 de julio de 2021, una alumna dejó de asistir a sus clases en dicho establecimiento educacional, ante lo cual no se realizó el proceso de indagación y acreditar con evidencia ni respaldos formales que justificaren las ausencias presenciales o en línea de esa estudiante, tomando



los resguardos que la normativa faculta. Se evidenció que no se efectuó dicho proceso pues recién con fecha 10.08.2021 recibieron un correo electrónico del padre de la alumna ausente, indicando que la estudiante estuvo al cuidado de su madre y hermano menor durante gran parte de ese período de inasistencia.

Séptimo: Que, en cuanto a la legalidad del acto impugnado, no se vislumbra que haya existido una vulneración al principio de tipicidad y legalidad en la resolución recurrida, por cuanto quedó acreditado que la reclamante infringió la Circular N° 482 de 2018, con relación a su Anexo N°1, arriba señalado, incumpliendo la obligación de contar con un protocolo de vulneración de derechos en su Reglamento Interno y su obligación de haber realizado un proceso de indagación sobre las ausencias a clase por un tiempo prolongado, de una alumna de su establecimiento, infracciones que se califican como menos grave en el artículo 77 letra c) de la ley 20.529, el cual prescribe: Son infracciones menos grave: “infringir los deberes y derechos establecidos en la normativa educacional que no sean calificados como infracción grave.

Octavo: Que, en cuanto al quantum de la sanción aplicada a la reclamante, ascendente a 51 UTM, ella se encuentra comprendida dentro del rango legal para aquellas sanciones aplicables a las infracciones de naturaleza menos grave, como lo es la que se ha configurado en contra de la reclamante, conforme a la letra b) del artículo 73 de la Ley N° 20.529, cuantía que discurre entre 51 y 500 UTM, encontrándose en la base misma del rango, la sanción pecuniaria impuesta.

En lo que se refiere a la pretendida falta de proporcionalidad de la sanción conforme a los elementos del artículo 73 letra b) de la Ley N° 20.529, los criterios legales de determinación de la sanción se aplican de acuerdo con la naturaleza del hecho infraccional. Así, la circunstancia de que el establecimiento cometió dos infracciones menos grave y la falta de sanciones pecuniarias anteriores llevaron a aplicarle el mínimo del rango posible permitido por la ley, mínimo legal que en ningún caso puede calificarse de desproporcionado.

Noveno: Que, en consecuencia, no adoleciendo de vicio de ilegalidad el acto sancionatorio, la solicitud de rebaja de sanción resulta improcedente, toda vez, que la resolución impugnada ha sido dictada válidamente, conforme ha quedado asentado en la sustanciación del proceso sancionatorio.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley N° 20.529 **se rechaza**, sin costas, el reclamo presentado por la Corporación Municipal de Servicios y Desarrollo de Maipú, en contra de la Resolución



Exenta PA N° 000824, de fecha 23 de agosto de 2023, dictada por la Superintendencia de Educación, que resolvió acoger parcialmente el recurso de reclamación que dedujo en contra de la Resolución Exenta N° 2022/PA/13/0763, de fecha 01 de abril de 2022.

Redactó el ministro suplente señor Sergio Padilla Farías.

Regístrese, notifíquese y archívese.

N°Contencioso Administrativo-589-2023.

Pronunciada por la **Séptima Sala** de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por la ministra señora María Loreto Gutiérrez Alvear e integrada por el ministro (S) señor Sergio Padilla Farías y por la abogada integrante señora Claudia Candiani Vidal.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: CVCTXPPXWDR

Pronunciado por la Séptima Sala de la C.A. de Santiago integrada por Ministra Maria Loreto Gutierrez A., Ministro Suplente Sergio Enrique Padilla F. y Abogada Integrante Claudia Candiani V. Santiago, treinta de agosto de dos mil veinticuatro.

En Santiago, a treinta de agosto de dos mil veinticuatro, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: CVCTXPPXWDR